República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolución Alcance Particular

Número: RESAP-2024-9-APN-UIF#MJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 17 de Julio de 2024

Referencia: EXPTE. UIF N°1223/2017 - ESCRIBANA PENZO RAMÍREZ MÓNICA ELISA S/ INCUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN UIF N.° 50/2011 Y MODIFICATORIAS

VISTO el Expediente UIF N° 1223/2017 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA, la Ley N° 25.246 (texto vigente al tiempo de los hechos) y sus modificatorias, el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios, y las Resoluciones UIF Nros. 21 del 18 de enero de 2011, 50 del 31 de marzo de 2011, 111 del 14 de junio de 2012, 152 del 23 de noviembre de 2016 y sus respectivas modificatorias (actualmente reemplazada por la Resolución UIF N° 127 del 12 de julio de 2023), y 92 del 3 de mayo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se iniciaron con el requerimiento de información efectuado, en el marco de las facultades previstas en el inciso 1° del artículo 14 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por parte de la Dirección de Supervisión de esta UIF al Colegio de Escribanos de Escribanos de la Provincia de Corrientes (en adelante "el Colegio"), a fin de que éste remita la nómina de la totalidad de los escribanos registrados en dicha institución.

Que dicha nómina fue oportunamente enviada por el Colegio, y posteriormente confrontada por la Dirección de Supervisión contra el Registro de Sujetos Obligados (SRO), verificándose al 23 de octubre de 2017, la falta de registración por parte de la escribana Mónica Elisa PENZO RAMÍREZ (v. fs. 19).

Que, así las cosas, en el marco del expediente citado en el VISTO y mediante la Resolución UIF N° 92/2018 (la "Resolución de Instrucción") se ordenó instruir un sumario tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder a Mónica Elisa PENZO RAMÍREZ, CUIT N° 27-23062296-0 (en adelante denominada indistintamente, la "Sumariada" y/o la "Escribana"), en su carácter de Sujeto Obligado contemplado en el inciso 12 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 (texto vigente al tiempo de los hechos) por *"...haber incumplido, prima facie, el deber de registrarse como Sujeto Obligado conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 50/2011..."*.

Que en dicho acto administrativo se formuló un cargo por presunto incumplimiento al deber de registrarse como Sujeto Obligado, conforme lo dispuesto en la Resolución UIF N° 50/2011.

Que la referencia a la Ley N° 25.246 a lo largo de la presente Resolución, se efectúa conforme el texto ordenado según las modificatorias vigentes al momento de los hechos (previo a la reforma por ley N° 27.739 B.O. 15/03/2024, actualmente vigente).

Que el mencionado procedimiento tuvo por objeto establecer la configuración de la infracción prevista en el artículo 24 del Capítulo IV de la ley citada y, en su caso, sugerir la sanción que pudiera corresponder.

Que asumida la instrucción el 7 de junio de 2018 (v. fs. 41), se procedió a realizar la consulta al Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) a fin de verificar los datos de registración del Sujeto Obligado, oportunidad en la cual se constató que el mismo contaba con una registración del 7 de febrero de 2018 (v. fs. 42).

Que el 7 de junio de 2018 procedió a: (i) citar en calidad de sumariada a la escribana Mónica Elisa PENZO RAMÍREZ (CUIT N° 27-23062296-0), para que en el plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos presentara descargo, tomara vista y ofreciera prueba; (ii) instarla a constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificada en la sede central de la UIF donde tramitan las actuaciones, el siguiente día hábil de dictadas las disposiciones y resoluciones que en el futuro se adopten; y (iii) citarla a la audiencia fijada para el 23 de julio de 2018 (v. fs. 43/43 vta.).

Que si bien la sumariada fue notificada por oficio al domicilio informado por el Colegio de Escribanos, la notificación fue devuelta por Correo Argentino con indicación de mudanza (v. fs. 44/45 vta. y 47/47 vta.), por lo que el 17 de julio de 2018 se dejó sin efecto la audiencia fijada y se fijó una nueva en su reemplazo para el 17 de septiembre de 2018, ordenándose el envío de una nueva notificación al domicilio informado por la sumariada en el SRO (v. fs. 46).

Que, de manera subsidiaria, se ordenó librar oficio a la Excma. Cámara Nacional Electoral a fin de que informara el último domicilio de la sumariada, así como también librar oficio al Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes a fin de que informara el último domicilio denunciado por la misma, junto con información sobre la existencia de alguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad en el ejercicio de la función notarial, si existiere alguna medida disciplinaria (en su caso, con indicación de tipo y duración), así como su condición en el Registro (Titular/ Adscripta), y en el supuesto de ser Adscripta, los datos de registración del titular de Registro (v. fs. 46/46vta.).

Que, consecuentemente, la sumariada fue notificada por Oficio al domicilio informado en el SRO el 27 de julio de 2018 (v. fs. 50/52 y 58), coincidente con el informado por la Excma. Cámara Nacional Electoral (v. fs. 53/56).

Que ante el pedido de información remitido por oficio al Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes (v. fs. 48/49 y 57), el 17 de agosto de 2018 éste informó que la escribana sumariada: (i) era Colegiada con Habilitación desde el 30 de noviembre de 1999 bajo el N° 848; (ii) fue Adscripta al Registro Notarial N° 24 con asiento en esa ciudad por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2621 del 04 de noviembre de 2011, cuya titularidad pertenecía a la Escribana Mónica Helena MAIDANA, condición a la que renunció la Escribana PENZO RAMÍREZ, y siendo dicha renuncia aceptada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 1740 del 11 de julio de 2018; (iii) a la fecha del envío de la información continuaba ejerciendo la función notarial en su calidad de Colegiada con Habilitación N° 848, con domicilio legal en calle Córdoba N° 748 P.B. Depto. 4 de esa ciudad de Corrientes; y (iv) no registraba antecedentes disciplinarios o licencias en el ejercicio de la profesión (v. fs. 59).

Que el 30 de julio de 2019 se ordenó librar una cédula al domicilio especial informado en el SRO por la sumariada, dejar sin efecto la intimación a constituir domicilio en C.A.B.A., y atento a lo establecido en la

Resolución UIF N° 96/2018, intimarla por el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a los efectos de obtener el Código de Usuario, a fin de acceder al Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes, bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificada en la sede central de la UIF donde tramitan las actuaciones, el primer día de nota hábil -martes o viernes- posterior a la fecha del dictado de las providencias y/o resoluciones en el marco de las actuaciones de la referencia, y a citar a la sumariada a prestar declaración el 30 de agosto de 2019 (v. fs. 62/62 vta.), por lo que la cédula fue librada y notificada a la sumariada el 1 de agosto de 2019 conforme los artículos 140 y 141 del CPCCN (v. fs. 63/64 vta.).

Que el 30 de agosto de 2019 se dejó constancia de la incomparecencia de la sumariada a la audiencia fijada para la fecha (v. fs. 65).

Que advirtiéndose que la sumariada no había presentado su descargo, pese a que se encontraba debidamente notificada, se dio por decaído el derecho para hacerlo, y en atención a que tampoco había dado cumplimiento con la intimación a retirar el código de usuario, se hizo efectivo el apercibimiento, quedando en lo sucesivo la sumariada notificada en la sede de esta Unidad (v. fs. 66).

Que de las posteriores búsquedas realizadas en el SRO (v. fs. 66/69) se desprendió que: (i) la escribana Mónica Elisa PENZO RAMÍREZ se registró ante esta Unidad el 7 de febrero de 2018; y (ii) la escribana Mónica Helena MAIDANA, titular del registro donde se desempeñaba la sumariada no se registró ante esta Unidad, y en consecuencia, no cumplía con el envío de Reportes Sistemáticos Mensuales RSM (v. fs. 70).

Que, dado lo expuesto, el 2 de septiembre de 2019 se corrió traslado a la sumariada para la presentación de alegatos conforme a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 7° y por el artículo 29 de la Resolución UIF N° 111/2012.

Que el 27 de septiembre de 2019, atento el estado de las actuaciones y advirtiéndose que la sumariada no había presentado el alegato contemplado en el artículo 29 de la Resolución UIF N° 111/2012, pese a que se encontraba debidamente notificada, se dio por decaído el derecho para hacerlo (v. fs. 71).

Que luego de certificarse el cumplimiento formal de las etapas del procedimiento sumarial conforme Resolución UIF N° 111/2012 (v. fs. 72/74), el 29 de diciembre de 2020 la Instrucción elaboró el informe final de conformidad a lo previsto por el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012 (v. fs. 76/84), en el cual analizó los hechos y las constancias de autos a efectos de determinar la existencia del incumplimiento mencionado en la Resolución de inicio del sumario y, en este sentido, consideró el cargo allí detallado y meritó el mismo a la luz de lo actuado en el procedimiento sumarial.

Que en relación al cargo vinculado con la falta de Registración oportuna en el SRO (incumplimiento a la Resolución UIF N° 50/2011), es menester recordar la imputación contenida en la Resolución que dispuso la apertura de este sumario, a cuyo texto cabe remitirse, así como la ya citada normativa aplicable y los antecedentes obrantes en el presente Expediente.

Que la falta de registración fue constatada por la Dirección de Supervisión y consignada en su Informe Técnico, en el que se manifestó que a la fecha de realizarse la consulta en el SRO (23 de octubre de 2017) la escribana sumariada no se encontraba inscripta ante esta UIF (v. fs. 19/20 vta.).

Que la obligación de registración ante esta UIF rige para todos los sujetos obligados en virtud del inciso a) del apartado 2° del artículo 21 bis de la Ley N° 25.246.

Que el artículo 2° de la Resolución UIF N° 50/2011 estableció que los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 que se encontraban en actividad al momento de su publicación, debían registrarse en la página web de la UIF (www.uif.gov.ar/sro) entre el 1 y el 30 de abril de 2011, siendo que el artículo 3° de la misma norma dispuso que aquellos sujetos obligados que iniciaran su actividad con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución UIF N° 50/2011 debían efectuar la registración dentro del día 1 al 30 del mes correspondiente al inicio de la misma.

Que de las actuaciones surge que la sumariada era Colegiada con Habilitación desde el 30 de noviembre de 1999 bajo el N° 848, que fue Adscripta al Registro Notarial N° 24 con asiento en la ciudad de Corrientes por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2621 del 4 de noviembre 2011, cuya titularidad pertenecía a la Escribana Mónica Helena MAIDANA, que renunció a la condición de Adscripta y dicha renuncia fue aceptada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 1740 del 11 de julio de 2018, y que continuaba ejerciendo la función notarial en su calidad de Colegiada con Habilitación N° 848.

Que se acreditó que la sumariada se hallaba registrada ante esta Unidad desde el 7 de febrero de 2018.

Que el Sujeto Obligado omitió cumplir su obligación de registración durante seis (6) años y dos (2) meses.

Que la sumariada no se presentó en instancia sumarial, motivo por el cual no existen defensas por parte de la misma en relación al cargo endilgado.

Que la falta de registración es una infracción que reviste una importancia sustancial, puesto que ella impide el cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la normativa aplicable (envío de Reportes de Operaciones Sospechosas -ROS-, RSM, entre otros), dificulta el ejercicio de la atribución fiscalizadora de esta UIF, y además genera una situación de desigualdad respecto de otros sujetos obligados que procedieron a registrarse en tiempo y forma.

Que, en este sentido, la registración de la totalidad de los sujetos obligados ante la UIF (www.uif.gov.ar) tiene por finalidad la identificación de aquellos y facilitar el contacto permanente y fluido, y constituye un paso previo para la remisión de los reportes de operaciones sospechosas a través de Internet (considerandos de la Resolución UIF N° 50/2011).

Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, se tiene por acreditado que la escribana sumariada ejerció efectivamente la actividad notarial, y que su falta de registración ante esta UIF configuró una infracción a lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución UIF N° 50/2011, resultando en consecuencia responsable del cargo imputado, a tenor de lo prescripto en los incisos 1° y 3° del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y modificatorias.

Que la Instrucción consideró acreditado el cargo por las obligaciones establecidas en el artículo 3° de la Resolución UIF N° 50/2011 y modificatorias, y sugirió la aplicación de una MULTA DE PESOS SESENTA MIL ($60.000) por no cumplir oportunamente con el deber de registración en el SRO.

Que la finalidad de las sanciones administrativas es, junto con el reproche concreto por el incumplimiento constatado, la prevención y disuasión de conductas contrarias al ordenamiento jurídico, evitando la reiteración de incumplimientos por parte de los sumariados y la vigencia y efectividad de las normas de PLA/FT para el resto de los actores del sistema.

Que debe tenerse presente que las sanciones impuestas por esta Unidad *"...como parte del derecho administrativo sancionador, tienen una naturaleza preventiva y por tanto no participan de la naturaleza de las*

medidas represivas propias del derecho penal (Fallos:330:1855, "Comisión Nacional de Valores c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco"; Sala II, causas "Emebur", citada, y "Banco Macro SA y otros c/ UIF s/ Código Penal –Ley 25.246 –Dto. 290/07 Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril de 20154). Con esa orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la expresión "pena" contenida en el artículo 24, inciso 1°, de la ley debe interpretarse como sinónimo de "sanción" (Francisco J. D'Albora (h), "Lavado de dinero y régimen penal administrativo", La Ley 2003C1272). Es por ello que no puede convalidarse, en este ámbito, la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por las normas específicas (Fallos: 330:1855). La circunstancia de que en la ley 25.246 se hace referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal no tiene, por las razones apuntadas, la aptitud para modificar las conclusiones expuestas, en tanto las consecuencias o reproches por las infracciones, esto es las sanciones, no trascienden de la esfera del derecho administrativo sancionador (Sala II, causa "Emebur", citada)" (CNCAF, Sala I, "Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF – resol. 36/10 (Expte. 68/10)" del 24/05/2016 y "Banco Supervielle SA c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25" del 20/09/2016).

Que *"...en cuanto a la naturaleza de las multas aplicadas y la consecuente aplicación de los principios que rigen en el derecho penal, debe señalarse que las sanciones aplicadas en autos por la Unidad de Información Financiera tienen naturaleza administrativa y no son otra cosa que la consecuencia del ejercicio del poder de policía por parte de quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación al efecto (conf. artículos 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que impone la autoridad de aplicación en cumplimiento de los deberes que le fueron encomendados tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las medidas represivas contempladas en el Código Penal de la Nación; por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del derecho penal. Precísese que los castigos que se imponen como consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las normas que conforman el plexo normativo bajo examen (...) constituyen infracciones administrativas; respecto de las cuales no puede convalidarse la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por la normativa específica, lo que se ve reafirmado por la naturaleza preventiva del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la represiva del derecho penal (conf. -en este sentido- dictamen de la Procuración General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en autos: "Comisión Nacional de Valores c/Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/transferencia paquete accionario a Nabisco", el 24/4/2007, registrado en Fallos: 330:1.855). (...) Desde esta perspectiva, deviene improcedente la pretendida asimilación del especial régimen aplicable en la materia de autos con el derecho penal, en cuanto resulta claro que la sanción de multa es de naturaleza administrativa y no penal; lo que en nada obsta al debido resguardo de la defensa en juicio y la plena vigencia de las garantías propias del procedimiento sumarial -que se encuentra previsto en la resolución U.I.F. N° 111/2012-, pero sí impide una traslación acrítica y en bloque de la normativa propia de la materia criminal. En consonancia con lo argumentado, resáltese que en el decreto N° 290/2007, reglamentario de la ley 25.246, se dispuso la aplicación, en lo pertinente, de las normas de la ley 19.549 y modificatorias, su decreto reglamentario y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin referencia alguna al Código Penal de la Nación ni su código de rito. Y en nada modifica lo hasta aquí sostenido el hecho que a lo largo del articulado de la ley 25.246 haya referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal de la Nación, pues tal como se desprende de lo hasta aquí señalado, el régimen bajo examen tiene por objeto evitar la comisión de los ilícitos ya señalados, a cuyos efectos se establecieron obligaciones a cargo de los denominados Sujetos Obligados, cuya inobservancia trae aparejada la aplicación de castigos que, como se viene explicando, no trascienden de la esfera del derecho sancionador administrativo. Lo expuesto lleva a desestimar sin más toda argumentación formulada que* tuviera sustento *en la pretendida aplicación lisa y llana de los principios del derecho penal."* (CNACAF, Sala II, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A.

y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014, "Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y "Yecora, Fernando José y otros c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 23/02/2016).

Que este criterio ha sido reiterado por jurisprudencia del fuero al sostener que "*...la actividad desplegada por la sancionada se encuentra sometida al poder de policía ejercido por la Unidad de Información Financiera* (...) *que ha sido designado como el encargado del análisis, tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e impedir delitos vinculados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (conf. art. 6, ley 25.246) y, conforme lo dispuesto en el capítulo IV del referido precepto, se encuentra facultada para reglamentar y sancionar –dentro de los límites contemplados en el referido precepto– la inobservancia de las pautas acordadas que hacen, básicamente, al cumplimiento de concretas obligaciones informativas a cargo de los "Sujetos Obligados...*" (CNACAF, Sala II, "Sergio Villella SA y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25246 – Dto. 290/07 art 25" (Expte. N° 2342/2018, sentencia del 28 de agosto de 2018).

Que, asimismo, corresponde resaltar que es potestad propia y exclusiva de quien aquí suscribe, establecer el *quantum* de la multa a aplicar por el incumplimiento acreditado por la Instrucción durante el procedimiento sumarial.

Que es dable señalar, con relación al considerando anterior, que en numerosas oportunidades se ha señalado que la determinación y graduación de la sanción es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (v. 19/09/2017, Cámara Nacional de Apelaciones en la Contencioso Administrativo Federal, Sala V; *Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ UIF s/Código Penal - Ley 25246 – DTO. 290/07 ART. 25*; 27/05/1997, Cámara Nacional de Apelaciones en la Contencioso Administrativo Federal, Sala V; *Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina;* 19/07/2006, Cámara Nacional de Apelaciones en la Contencioso Administrativo Federal, Sala II, *Travaglia, José O. y otros c/ BCRA – Resolución N° 109/2012 – Expte. 100.045/94 Sum. Fin. N° 893*; entre otros).

Que existen medios para limitar la discrecionalidad de la que goza la Administración Pública en la determinación del monto de las multas que impone, como son las reglas de graduación, resultando menester ponderar las circunstancias que concurren en el caso a fin de fijar el *quantum* de la sanción.

Que cabe indicar que el procedimiento administrativo que se despliegue a fines de efectivizar el régimen sancionatorio de la UIF debe asegurar la vigencia del principio de razonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deben tutelar, a fin de que respondan a lo necesario para la satisfacción de su cometido.

Que el principio de proporcionalidad encierra una exigencia de ponderación guiada a que se corresponda la gravedad de la sanción con la del comportamiento de los sumariados y que la graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación.

Que resulta relevante enunciar cuáles son, en el caso objeto de análisis, los factores de ponderación que sirven de guía para una razonable cuantificación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que, en este sentido, se ponderó: i) el carácter y naturaleza del incumplimiento imputado en esta instancia sumarial, siendo que la falta de registración ante esta UIF es una infracción que reviste especial importancia, debido a que la misma pone en desigualdad a los sujetos obligados que procedieron a registrarse en tiempo y forma, e impide, en principio, el cumplimiento de otras obligaciones establecidas por la normativa aplicable en

materia de prevención de lavado de activos y dificulta el ejercicio de la atribución de fiscalización por parte de esta UIF; (ii) el lapso de tiempo del incumplimiento de la obligación de registración por parte de la sumariada; (iii) el carácter de Adscripta; y (v) que la sumariada procedió a su registración el 7 de febrero de 2018.

Que, en definitiva, no resulta exigible una exacta correspondencia entre la multa y la infracción cometida, sino que es suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de los diferentes parámetros legales previstos y las circunstancias fácticas tenidas en cuenta para justificar la sanción (Fallo "Swiss Medical S.A. c. DNCI s/ defensa del consumidor - ley 24.240 art. 4", sentencia de la CNACAF, Sala V del 14.07.2015).

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado reiteradamente indicando que *"...la graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación y por ello no es competencia de esta Casa abrir juicio acerca de ello..."* (Dictámenes PTN 133:113, 261:121, 293:144, 295:269, entre otros) y que *"...la determinación precisa del monto de la pena entre los límites mínimo y máximo establecidos por la ley constituye una facultad discrecional exclusiva de la autoridad con competencia para resolver..."* (Dictamen PTN 294:114).

Que toda facultad discrecional –como lo es la determinación del monto de la multa a aplicar- requiere la necesidad de una valoración subjetiva por parte de la Administración, al permitirle elegir entre una o más alternativas válidas, igualmente ajustadas desde la perspectiva del Derecho (cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás Ramón, *Curso de Derecho Administrativo*, t. I, p. 444, 8° ed., Civitas, Madrid, 1997).

Que resulta claro que el legislador ha establecido un margen de acción o elección para el ejercicio de la denominada discrecionalidad administrativa o arbitrio administrativo, así la adopción del monto, por parte de quien aquí suscribe, a partir del asesoramiento realizado por el área técnica, en ejercicio de facultades discrecionales, deberá, siguiendo la tesis delineada por Fiorini, engarzarse con la función administrativa y, con los fines administrativos (conf. cita en Derecho Administrativo en transición, Juan G. Corvalán, pág. 76, Bs. As. Astrea, 2016).

Que con relación a la responsabilidad que le cabe a la aquí sumariada, es del caso mencionar que la Resolución UIF N° 92/2018 ordenó la apertura de estas actuaciones sumariales al Sujeto Obligado por haber incumplido, *prima facie*, lo dispuesto en la Resolución UIF N° 50/2011 y modificatoria.

Que con relación a las funciones encomendadas a los escribanos públicos como sujetos obligados, corresponde tener presente que *"... Dentro de esta relación de sujeción especial se atribuye razonablemente un rol preponderante a los escribanos en el sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría informativa entre el Estado y los operadores financieros. Sus conocimientos técnicos y experiencia profesional los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuando una transacción tiene indicios de vinculación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo..."* (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, "Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. c/ PEN s/ sumarísimo" del 4 de septiembre de 2018).

Que en dicho precedente, el Máximo Tribunal sostuvo, respecto del régimen informativo, que en consonancia con los estándares internacionales se entiende que el cumplimiento de esas funciones en forma eficaz demanda la colaboración de los escribanos que, además, cumplen una función de especial naturaleza al dar fe pública a los actos y contratos.

Que, respecto a la relevancia de cumplir con el deber de registración, la jurisprudencia ha dicho que "... *la*

registración de la totalidad de los sujetos obligados ante la UIF (www.uif.gov.ar) tiene por finalidad la identificación de aquellos y facilitar el contacto permanente y fluido. Asimismo, constituye un paso previo para la remisión de los reportes de operaciones sospechosas a través de internet (Considerandos de la resolución 50/11). Sobre dicha base, no resulta admisible el cuestionamiento de la sanción con fundamento en la falta de entidad de la infracción... (art. 24 de la ley 25.246)" (Clariá, Horacio Enrique c/UIF s/CÓDIGO PENAL-LEY 25246 –DTO 290/07 ART. 25).

Que dado el carácter técnico administrativo de las irregularidades en cuestión, su punibilidad surge de la contrariedad objetiva de la regulación y el daño potencial que de ello se derive, resultando que tanto la existencia de dolo como el resultado, son indiferentes.

Que con relación a la afectación al bien jurídico tutelado, la responsabilidad en la materia *sub examine* no requiere la existencia de un daño concreto derivado del comportamiento irregular, pues el interés público se ve afectado aún por el perjuicio potencial que aquél pudiere ocasionar.

Que, en este sentido, conforme se ha dicho en los autos caratulados "Cerviño, Guillermo A. y Otros c/ Banco Central de la República Argentina" (CNACAF, Sala II, 29/04/2008), *"La responsabilidad en la materia sub examine no requiere la existencia de un daño concreto derivado del comportamiento irregular (...) pues el interés público se ve afectado aun por el perjuicio potencial que aquel pudiere ocasionar (conf. Sala II, in re 'Banco Patagónico S.A.' del 17/10/1994 y esta sala, in re 'Banco Regional del Norte Argentino S.A.', del 6/4/1993) (...) resultando que tanto la existencia de dolo como el resultado, son indiferentes (conf. Sala 3°, in re 'Pérez Álvarez, Mario A.' del 4/7/1986) (...) a los efectos de la aplicación de sanciones, la falta de un efectivo daño a los intereses públicos y privados que el sistema legal tiende a preservar (conf. Sala 3°, in re 'Compañía Franco Suiza de Inversiones S.A.', del 7/10/1982)"*.

Que, asimismo, en similar sentido se ha expresado la CNACAF, Sala II, el 18 de agosto de 2018 en autos caratulados "Sergio Villella S.A. y Otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25246- Dto. 290/07 art. 25".

Que, cabe recordar que conforme se desprende del análisis del cargo, la infracción imputada en el marco del presente sumario ha generado una vulnerabilidad al sistema de PLA/FT del Sujeto Obligado.

Que, al respecto, la jurisprudencia sostuvo también que *"...debe señalarse que basta con la falta de observancia de los recaudos analizados* (...) *para hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados, requiriéndose –para su configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la norma. Es que este tipo de infracciones* (...) *son de las denominadas formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de 'pura acción' u 'omisión' y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf. esta Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. c/ D.N.C.I.' del 28/2/2012; 'Aguas Danone de Argentina S.A. c/ D.N.C.I.' del 1/12/2009 y en autos 'Viajes Ati S.A. – Empresa de Viajes y Turismo c/ D.N.C.I.', del 13/3/2009; entre otros). Las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada, bajo apercibimiento de las sanciones allí previstas, por manera que no es necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en forma previa a instruir el procedimiento sumarial"* (CNCAF, Sala II, 14/08/2014 "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Artículo 25" del 14/08/2014 y "Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley N° 25.246 – Dto. 290/07 Artículo 25").

Que en el mismo orden de ideas se ha afirmado que *"...el 'Régimen Penal Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor, normas propias del Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los principios penales son aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta factible la transposición automática de los principios y*

criterios del Derecho Penal (v. en tal sentido, Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí interesa, la aplicación de sanciones a los recurrentes no importa prescindir del principio de culpabilidad, ya que el elemento intencional está presente, al menos a título de culpa o negligencia. Al respecto, observa Nieto que una peculiaridad de las normas administrativas sancionadoras, radica en que la culpabilidad puede configurarse a partir de la diligencia que resulta normalmente exigible a quienes desempeñan en forma habitual determinada actividad (op. cit., págs. 347/348). A ello se añade el carácter formal de las infracciones, en tanto no necesitan ir acompañadas de un resultado lesivo concreto, sino que se conectan a un mero incumplimiento, con independencia de la lesión que con él pueda eventualmente producirse (op. cit., págs. 349/352). Por ello, los incumplimientos sancionados se deben a omisiones o cumplimientos irregulares de obligaciones normativamente establecidas, que los recurrentes debieron conocer e impedir, actuando con la debida diligencia, a fin de no incurrir en las conductas que se les reprochan." (CNACAF, Sala V, "Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246- Dto. 290/07 Art 25" del 21/05/2015).

Que se ha dado cumplimiento con la garantía de la tutela efectiva prescripta por los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Que en la tramitación de las presentes actuaciones se ha cumplido con el debido proceso adjetivo consagrado receptado por el inciso 8° del artículo 14, de la Ley N° 25.246, y con el inciso f) del artículo 1° de la Ley N° 19.549, que establece en los procedimientos administrativos -entre ellos los sancionadores- la posibilidad de ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada.

Que las conclusiones a las que ha arribado la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador se encuadran en el ejercicio de su competencia específica (Resoluciones UIF Nros. 111/2012 y 152/2016 actualmente reemplazada por la Resolución UIF N° 127/2023 B.O. 14/07/2023).

Que los incisos 1° y 3° del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias establecen que la persona humana que incumpla alguna de las obligaciones ante esta UIF será pasible de sanción de multa de PESOS DIEZ MIL ($10.000) a PESOS CIEN MIL ($100.000) en los casos en que no se pueda establecer el valor real de los bienes.

Que la finalidad esencial de las sanciones que aplica esta Unidad es la prevención y disuasión de conductas reprochables y que ello tiende a evitar la reiteración de los incumplimientos por parte de los sumariados.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen correspondiente conforme lo establece el inciso d) del artículo 7° de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias.

Que se le ha dado intervención al Consejo Asesor.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246 (texto vigente al tiempo de los hechos) y sus modificatorias, y el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declarar la responsabilidad de la escribana Mónica Elisa PENZO RAMÍREZ (CUIT N° 27-

23062296-0), conforme a lo dispuesto por el inciso 12 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 (texto vigente al tiempo de los hechos) y al inciso g) del artículo 2° de la Resolución UIF N° 21/2011, por haberse acreditado el cargo por falta de registración ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en tiempo oportuno, en infracción al artículo 3° de la Resolución UIF N° 50/2011 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- Imponer a la escribana allí citada, en consecuencia a lo dispuesto en el artículo 1° del presente, una multa de PESOS SESENTA MIL ($60.000), de acuerdo a lo expuesto en el CONSIDERANDO de esta Resolución y a lo establecido en los incisos 1° y 3° del artículo 24 de la Ley N° 25.246 (texto vigente al tiempo de los hechos) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese e intímese a la sumariada a efectivizar el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda- (https://erecauda.mecon.gov.ar), bajo apercibimiento de iniciarse la correspondiente ejecución. En caso de cancelarse la multa deberá acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días de haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma clara la sumariada que han efectuado el pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber a la sumariada que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma directa en el plazo de QUINCE (15) días por ante la justicia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, de acuerdo a lo establecido en los artículos 31 y 35 Resolución UIF N° 111/2012, con copia certificada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y, cumplido, archívese.

Digitally signed by YACOBUCCI Ignacio Martín
Date: 2024.07.17 16:56:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Martín Yacobucci
Presidente
Unidad de Información Financiera

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.07.17 16:56:49 -03:00